**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES
SALA CIVIL-FAMILIA**

**Magistrada Ponente
ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS**

Radicado: 17614-31-12-001-2020-00005-01

Sentencia N° 029

Discutida y aprobada mediante acta N° 031 de la fecha
Manizales, Caldas, ocho (08) de febrero del dos mil veintidós (2022)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Estudiada la sustentación del recurso de alzada, acorde el traslado que en cumplimiento del artículo 14 del Decreto 806 del 2020 fue corrido mediante auto del 24 de agosto pasado, se **RESUELVE** la apelación interpuesta por la parte demandante y la compañía aseguradora, frente a la sentencia proferida el 10 de agosto de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurado por la señora María Ensueño Largo en contra de los señores Mauricio Giraldo Hernández y Lázaro Miguel Funieles Portillo; trámite en el que Axa Colpatria Seguros S.A. comparece en calidad de llamada en garantía.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda. Solicita la parte actora, que mediante sentencia se declare la responsabilidad civil en cabeza de los demandados y se profiera la respectiva condena en su contra por los perjuicios materiales causados en las modalidades de daño emergente, lucro cesante consolidado y futuro; a la par de los inmateriales especificados como morales, daño a la vida de relación y daño a la salud, generados con el accidente de tránsito ocurrido el 20 de enero de 2018 donde la demandante resultó gravemente lesionada.

Fundantes de sus pedimentos, como hechos jurídicamente relevantes, sostiene la promotora que en la fecha antes señalada, en el sector conocido como “La U” ubicado en la vía que de Supía conduce a La Felisa, se presentó el suceso donde la víctima que circulaba en calidad de peatona fue arrollada por el vehículo de placas DAF 335, operado por el señor Mauricio Giraldo Hernández, de propiedad del codemandado Lázaro Miguel Funieles Portillo, quien a su vez se encontraba como pasajero.

Indica que el conductor llevaba exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del automotor, siendo el incidente atendido por la autoridad de tránsito que detalló como hipótesis: “*pérdida de control al entrar en curva se sale de la vía*”; a raíz del calamitoso evento la señora María Ensueño fue atendida inicialmente en

el Hospital San Lorenzo, siendo remitida, por la seriedad de sus afecciones, a la Clínica Avidanti de Manizales, lugar donde ingresó con *“TEC Severo, contusión pulmonar basal derecha, neumotórax apical izquierdo, trauma esplénico, fractura de isquion derecho, politraumatismo, herida en región superciliar derecha e izquierda”* que ameritaron la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos, a más de varias intervenciones quirúrgicas, obteniendo finalmente el alta el día 7 de febrero de 2018.

A su salida, durante el tiempo de recuperación tuvo que ser apoyada por un tercero que se encargó de todos sus requerimientos ya que estuvo inmobilizada, a pesar de lo cual nunca recibió ningún tipo de ayuda económica para su traslado a las terapias y gastos médicos.

La afectada fue valorada el 13 de febrero de 2019 por el Instituto Nacional de Medicina Legal, determinando producto del incidente una incapacidad definitiva de 70 días y secuelas documentadas como: *“Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; Perturbación funcional de órgano sistema nervioso central de carácter permanente; Perturbación funcional de órgano de la locomoción de carácter permanente; Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter permanente; Perturbación funcional de miembro inferior derecho de carácter permanente”*; siendo así mismo dictaminada la pérdida de su capacidad laboral en un 65%, el 25 de noviembre de tal calenda.

Señala que previo a la ocurrencia del siniestro, la demandante realizaba labores comerciales independientes vendiendo productos comestibles, por lo cual devengaba un salario mínimo mensual vigente, amén que su esfera interior se ha visto menoscabada por el dolor, congoja y aflicción ocasionados con las secuelas padecidas, que de paso le impiden caminar normalmente, realizar los oficios del hogar, en síntesis, continuar su vida en regularidad. (Fls. 179-191 Cdno. Ppal.)

2.2. La réplica.

La admisión de la demanda, radicada el 17 de enero de 2020, se dio a través de proveído datado 30 de análogo mes y año, notificada a los codemandados y a la llamada en garantía por conducta concluyente, los días 23 de noviembre de 2020 y 21 de abril de 2021, respectivamente, quienes emitieron pronunciamiento oponiéndose a las pretensiones y elevando como medios de defensa las siguientes excepciones perentorias:

2.2.1. Mauricio Giraldo Hernández y Lázaro Miguel Funieles Portillo: *“Irreal tasación de perjuicios inmateriales”*; *“Innominada y genérica”*.¹

Adicionalmente, los codemandados elevaron llamamiento en garantía frente a la compañía aseguradora que amparaba la responsabilidad del rodante para el momento de los hechos, Axa Colpatria Seguros S.A.

¹ 01CuadernoPrincipal. “28ContestacionDemanda.pdf” Expediente Sharepoint.

2.2.2. Axa Colpatría Seguros S.A. invocó frente a la demanda principal las excepciones de: “Ausencia de responsabilidad civil extracontractual”; “Ausencia de daño en los términos y cuantía solicitadas” y con relación al llamamiento en garantía: “Límite de valor asegurado”; “Disponibilidad del valor asegurado”; “Deducible”.²

2.3. La Sentencia. Mediante decisión datada 10 de agosto de 2021, tras aludir al marco conceptual que recoge la responsabilidad civil extracontractual generada en ejercicio de las llamadas actividades peligrosas, el Juzgado de conocimiento encontró reunidos sus elementos axiológicos, disponiendo así la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales irrogados, a cargo directamente de los convocados, a quienes se impuso sufragar los dineros de su peculio y recobrarlos posteriormente a la aseguradora llamada en garantía con base en la póliza. En apoyo de su decisión esbozó:

(i) El daño fue plenamente acreditado, consistió en las lesiones ocasionadas a la víctima directa quien para el momento de los hechos se encontraba circulando por la zona en calidad de peatona; aquél fue causado con ocasión de la actividad riesgosa desarrollada por el conductor del automotor de placas DAF 335 quien confesó haber perdido su control, a más que su culpa se presume conforme lo dispuesto en el artículo 2356 del Código Civil, misma extensible al propietario como guardián de la actividad, sin que hubiese establecido, a efectos de exonerarse de responsabilidad que en el evento intervino, un elemento extraño.

(ii) En torno a los perjuicios materiales, atendiendo al dictamen sustentado por el perito de la Universidad de Antioquia que daba cuenta de la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, sobre el que además adujo no haberse desvirtuado por los medios procedentes, en específico con otra experticia, la sentenciadora liquidó el **lucro cesante consolidado** por valor de \$21.546.085 y el **futuro** en suma de \$139.049.166, aplicando la fórmula sentada de tiempo atrás por la jurisprudencia patria, mientras que el **daño emergente** lo denegó por carecer de pruebas que lo soportaran.

Relativo a los menoscabos inmateriales, consideró que el dolor, angustia, tristeza y desasosiego por los cuales atravesó la afectada al verse limitada en sus facultades físicas se erigen en rubro susceptible de repararse a título de **perjuicios morales**, fijando como *quantum* un monto de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes; así mismo halló reunidos los supuestos para indemnizar el **daño a la vida en relación** toda vez que la demandante fue privada de su “núcleo social, de las actividades que le hacían la vida más agradable, cosas que ya no volverá a hacer, posibilidades que ya no volverá a tener” ordenando el reconocimiento a su favor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(iii) Por solicitud de la compañía llamada en garantía, el proveído fue objeto de adición en el sentido de condenar al extremo promotor a la sanción por excesiva tasación de detrimentos materiales contemplada por el artículo 206 del Estatuto Procesal Civil.

² “50ContestacionAxaColpatría.pdf” ídem.

2.4. Los Reparos. La determinación adoptada fue objeto de apelación por todos los intervinientes, quienes en sede de la audiencia esbozaron a manera de reproche diversos argumentos, siendo pertinente señalar que la mandataria judicial de los señores Mauricio Giraldo Hernández y Lázaro Miguel Funieles Portillo, omitió sustentar la alzada en la oportunidad adjetiva correspondiente, preterición que condujo a declararla desierta respecto a ellos mediante auto del 4 de noviembre pasado.

2.4.1. Demandante: Manifestó su desacuerdo con la sanción, bajo el entendido que los perjuicios materiales fueron calculados con base en las pruebas obrantes y si el resultado al que llegó el Despacho fue menor, ello correspondía a la fórmula aplicada sin que obrara temeridad o mala fe de su parte, aspectos a tener en cuenta según la providencia C-157 de 2013 en tanto no es dable su imposición de manera objetiva.

Conforme lo anterior, consideró que la penalidad se avenía improcedente en la medida que carece de motivación, máxime atendiendo a que la aseguradora no probó sus objeciones respecto a la cuantía de los daños y por ello sus excepciones de merito fueron desestimadas.

Así mismo discutió que la orden indemnizatoria se dirigiera a los demandados y no a la aseguradora, puesto que tal situación riñe con el derecho a la reparación integral de la víctima y a la tutela judicial efectiva, al dejársele a la expectativa de obtener las sumas a pesar de la expresa manifestación de aquellos en el sentido de no contar con el patrimonio para respaldar el pago, desconociendo además el papel del llamado en garantía como parte en el decurso procesal.

2.4.2. Axa Colpatria Seguros S.A. Expuso su divergencia con la decisión arguyendo:

(i) Existió indebida valoración de las herramientas persuasivas, ya que es diáfano que en la producción del hecho tuvo directa injerencia la conducta de la víctima quien para el momento se desplazaba dentro del espacio destinado al tránsito vehicular, hecho que emana de las sendas contradicciones en que incurrieron los testigos; adicional a lo cual se encuentra que, distinto a lo considerado por la Juzgadora, las afirmaciones del codemandado Giraldo Hernández no corresponden a una confesión respecto a su culpa en tanto únicamente indicó haber perdido el control del automotor, situación que pudo presentarse por diversas circunstancias, especialmente la presencia de la demandante en la vía, sin que ello fuera tenido en cuenta en el fallo a pesar que conducía a declarar la culpa exclusiva de la afectada o su incidencia en el evento.

En idéntico sentido, afirma que el Despacho pretirió la valoración racional del dictamen pericial, en primer lugar al sostener que la contradicción realizada por el mandatario de la recurrente fue sorpresiva y extemporánea, pues ella se surtió en sede de la audiencia según así lo permite el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo cual no fueron atendidas las inconsistencias del perito en la sustentación, sin que para desvirtuarlo sea posible demandar la presentación de uno nuevo, como fue indicado en la sentencia.

Así mismo, se omitió considerar los vacíos de que adolecía la experticia, en contravía de los requisitos contemplados por el artículo 226 C.G.P., pues no hay certeza de las personas que intervinieron en su confección, ni de la idoneidad profesional del experto quien no allegó sus títulos académicos y tampoco explicó en forma satisfactoria el método empleado para asignar los porcentajes de pérdida de capacidad laboral, entre otros aspectos que le restan mérito demostrativo.

(ii) En cuanto al tema de las sumas resarcitorias, expuso su inconformidad con las otorgadas al tildarlas de excesivas, en especial en lo que atañe al daño en la salud o daño a la vida de relación en la medida que en el *iter* adjetivo no fueron establecidas cuáles eran las actividades genitoras de placer o recreación que la señora Largo realizaba antes del evento y que a raíz del mismo no pudo volver a desplegar, sino que el Juzgado las presumió a partir de las lesiones, pues los testigos únicamente declararon sobre la imposibilidad para ejecutar sus actividades laborales y la tristeza que padeció, rubros ya definidos con las indemnizaciones del lucro cesante y perjuicios morales.

2.5. La réplica. Dentro del término del traslado del recurso, se pronunciaron los aquí recurrentes de la siguiente forma:

2.5.1. Demandante: Solicitó la confirmación de la sentencia recurrida, aduciendo para ello, en síntesis, que los razonamientos vertidos respecto a las pruebas arrojadas fueron los adecuados, exponiendo las razones por las cuales ellas acreditaban la responsabilidad endilgada y el monto de los menoscabos encontraba sustento en el dictamen pericial que la contraparte tuvo la oportunidad de discutir en la respectiva diligencia.

2.5.2. Llamada en garantía: Calificó de incongruente el requerimiento de la promotora en el sentido de condenar a la aseguradora al pago de las sumas a indemnizar, por cuanto ninguna relación sustancial la ata con ella, entendido bajo el cual no podría beneficiarse de la vinculación realizada en virtud del artículo 64 C.G.P., ya que el convenio aseguratorio fue suscrito exclusivamente con los codemandados y la señora María Ensueño se sustrajo de ejercitar la acción directa contra Axa Colpatria Seguros S.A.

En cuanto a la sanción por exceso en el juramento estimatorio, deprecó la confirmación de la providencia, toda vez que el precepto 206 del citado estatuto no atiende a la buena fe de quien lo presta, sino a la disparidad entre lo pretendido y lo efectivamente probado.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema Jurídico

Encontrando que los presupuestos procesales están reunidos, que no se observa causal de nulidad o irregularidad alguna que obligue a retrotraer lo actuado a etapa anterior, corresponde a la Sala, atendiendo a los reproches elevados por las recurrentes contra la providencia de primer nivel, determinar frente a la

aseguradora: **(i)** Si con el material probatorio arribado al dossier puede darse por establecido el medio exceptivo alegado por los demandados consistente en la culpa exclusiva de la víctima que llevaría a su absolución; **(ii)** En caso negativo, se definirá si conforme las herramientas persuasivas, en concordancia con los lineamientos jurisprudenciales aplicables, había lugar a reconocer los perjuicios deprecados en la modalidad de daño a la vida de relación como fue reconocido por la judicial cognoscente; mientras que respecto a la promotora: **(iii)** Si la sanción impuesta con ocasión de la excesiva estimación del juramento estimatorio devenía procedente, y **(iv)** La posibilidad de emitir la condena contra la compañía aseguradora que amparó la responsabilidad de los daños generados.

3.2. Tesis de la Sala

La Corporación delantadamente anuncia que la providencia se confirmará con modificaciones, por cuanto de los medios de convicción no es posible predicar que en el accidente de tránsito que motivó la interposición de la acción resarcitoria, intervino el elemento extraño a que alude la aseguradora con la potencialidad de desvirtuar la presunción de culpa contemplada por el ordenamiento jurídico para asuntos como el aquí debatido, por lo que la declaratoria de responsabilidad en cabeza de los demandados se mantendrá, no obstante, la reparación dictada por el Juzgado de primer nivel frente al daño a la vida de relación a favor de la víctima directa será objeto de reducción.

Aunado a lo anterior, la penalidad por el exceso en el juramento estimatorio se ratificará, por cuanto la misma obedece a parámetros netamente objetivos; en tanto que en razón a la finalidad del llamamiento en garantía, la compañía se encuentra en la obligación de responder ante la quejosa por las indemnizaciones concedidas, con los límites establecidos por el vínculo aseguratorio suscrito con el codemandado Funieles Portillo.

3.3. Supuestos jurídicos

3.3.1. En términos generales, podría definirse la responsabilidad civil como la obligación que le asiste a las personas de indemnizar los daños que con sus conductas *-activas u omisivas-*, las desplegadas por sus dependientes o con los elementos en su custodia, se les cause a terceros que no se encuentran en deber jurídico de soportarlos. La función principal de tal concepto es la reparación de la víctima, reconociendo que la fuente de responsabilidad puede provenir de la conducta asumida en el marco de una relación comercial preexistente entre los sujetos como es la *-responsabilidad contractual-* o sin mediar aquel vínculo, la originada en un hecho jurídico con repercusión civil *-responsabilidad aquiliana o extracontractual-*.

En punto del régimen que para el caso en estudio interesa, previsto por los artículos 2341 y siguientes del Código Civil, se tiene que la responsabilidad puede surgir de los perjuicios seguidos del daño ocasionado por hechos jurídicos con los que se comprometen los derechos de las víctimas. Sucesos de tipo delictuoso bien sea por la intención positiva de inferir el menoscabo, o culposos por la omisión o incumplimiento del deber objetivo de cuidado.

Así, como elementos estructurales para la declaratoria de responsabilidad civil que se viene hablando, se erigen: **a)** el daño cierto entendido como el menoscabo en el patrimonio de la parte afectada a raíz de la conducta o hecho del agente **b)** la culpa derivada de la negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la normativa establecida por parte del sujeto a quien se atribuye la responsabilidad, y; **c)** el vínculo causal entre este y aquella.

3.3.2. En lo que corresponde al ejercicio de actividades peligrosas, en este caso la conducción de vehículos, donde la imputación es de culpa presunta, la Corte Suprema de Justicia y en desarrollo de lo establecido en el art. 2356 del C.C., tiene decantado que “...*la responsabilidad se juzga al abrigo de la “(...) presunción de culpabilidad (...)”*Cualquier exoneración, por tanto, debe plantearse en el terreno de la causalidad, mediante la prueba de un elemento extraño (fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima)”, a ello se alude en la Sentencia SC12994-2016.

Relativo al tópico, en la reciente providencia SC-2111 del 2 de junio de 2021 se dijo: “(...)Si bien la Sala, luego, como se anticipó, enfatizó que la responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas recaía en una “presunción de culpa”, frente a la expresión literal del artículo 2356 del Código Civil, según el cual, en línea de principio, «todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta», cierto es, **ninguno de los fallos que pregonan la comentada presunción permite al demandado, para exonerarse de la obligación de reparar, probar la diligencia y cuidado. Por el contrario, para el efecto, en todos se exige una causa extraña, la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención de un tercero o el hecho exclusivo de la víctima (...)**”.
(Negrillas de la Sala)

Es decir que enmarcada la responsabilidad en el ejercicio de este tipo de actividad, a la víctima le corresponde acreditar el daño y el nexo causal; por su parte al demandado le incumbe, para exonerarse, demostrar la interferencia de un elemento extraño en la causación del mismo, entendido éste como la fuerza mayor o el caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero cuando actúa como causa única y exclusiva, pues en principio conforme al artículo 2356 del Código Civil opera a favor del afectado y respecto del agente una presunción de culpa, con base en el riesgo ingénito a las actividades de este linaje.

3.3.3. En lo que respecta al llamamiento en garantía, se tiene por definido que su fin principal cuando se ejercita por el demandado es la protección de su patrimonio, de modo tal que si llegare a declararse su responsabilidad en una eventual sentencia, corresponda al llamado entrar al resarcimiento de los perjuicios en virtud de la relación sustancial que lo ata con aquél atendiendo a la causa que dio lugar a su vinculación en el asunto. Dicho en otras palabras, se habilita a convocar a un sujeto extraño a la relación procesal en inicio trabada entre las partes, con ocasión de un elemento sustancial legal o convencional entre llamante y llamado, a propósito que al último se trasladen los efectos adversos de la providencia, librando el patrimonio del primero.

La consideración antecedente cobra especial relevancia cuando el vínculo de que se habla atañe a un seguro de responsabilidad civil, pues al mismo tiempo que este resguarda el pago de la indemnización a que tiene derecho el afectado, lo hace frente a los bienes del asegurado, de lo que se sigue que cualquier hermenéutica tendiente a desconocer, aminorar o suprimir su función originaria: “(...) *desnaturalizaría el contenido esencial de dicho convenio y particularmente la función con la que fue concebido por la ley, en demérito de la confianza que el asegurado deposita en esa modalidad de aseguramiento.*”³

Memórese así mismo que la indemnidad del patrimonio del asegurado, a la par de la real protección de las víctimas, fueron los baremos que inspiraron al legislador en el año 1990⁴ para la modificación del artículo 1127 del Estatuto Mercantil en el sentido que el contrato de seguro de responsabilidad civil *“impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado”*; bajo esta perspectiva, se encuentran múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Civil en el entendido de extender el obligación del pago a la llamada en garantía incluso si ella no fue demandada por vía de la acción directa, entre los cuales se resalta la providencia SC002 de 2018.

3.3.4. Atiende al daño, además de ser cierto, real y no eventual o hipotético, corresponde al damnificado que lo reclama demostrarlo; *“...no basta afirmarlo, pues que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al proceso”*⁵, lo que deriva en que, sin desconocer que existen excepciones conforme a las cuales se exime de tal probanza, no se presume. Por el contrario, la generalidad impone la atención de la carga probatoria, en tanto que no siempre la declaratoria de responsabilidad conlleva la reparación del perjuicio; en efecto, es posible que un hecho, aún doloso, no cause perjuicio alguno.

En lo referente a los daños extrapatrimoniales, debe tenerse en cuenta que los de daño a la vida de relación y los morales tienen naturaleza distinta, ya que mientras los primeros comportan una afectación proyectada a la esfera externa de la víctima, sus actividades cotidianas, relaciones con los más cercanos, amigos y compañeros, los segundos o sea los morales, implican una congoja que impacta directamente su estado anímico, espiritual y estabilidad emocional, tal como lo dijo la Sala Civil de la Corte en Sentencia SC-7824-2016; sin perder de vista que su determinación debe realizarse *“en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador...”*⁶ y si bien corresponde al *arbitrium iudice*, su cuantificación se sujeta a los factores antes relacionados, a las reglas de la experiencia y la sana crítica, procediendo el juzgador una vez demostrada su existencia, lo cual está a cargo de quien exige la indemnización, erigiéndose los valores previamente señalados por

³ STC10180-2019

⁴ Mediante la Ley 45 de tal año *“Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones.”*

⁵ Sentencia de casación del 18 de diciembre de 2009, exp.1998-00529, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda

⁶ Sentencia de casación del 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-00406, M.P. Arturo Solarte Rodríguez

la jurisprudencia patria en criterio orientador, que hasta la actualidad marca un *quantum* de \$60.000.000.

3.3.5. En punto de la indebida valoración de los medios de prueba, aquella se presenta cuando el funcionario judicial se aparta abiertamente de lo que ellos arrojan para adoptar la decisión a su arbitrio en contravía de la evidencia, así como en las hipótesis que el operador sustenta su sentencia en pruebas recaudadas de manera ilícita y no da mérito a las legalmente aportadas al plenario. Una acusación en tal sentido exige por parte de quien la eleva, la demostración plena para hacer ver que las deducciones del Juzgador son antojadizas, ilógicas, caprichosas y que no guardan relación alguna con los medios de convicción.

En tratándose del dictamen pericial, que para calificarlo como tal debe reunir los requisitos a que alude el artículo 226 del Estatuto Adjetivo, sus pautas de apreciación están contenidas en el precepto 232 de la codificación en cita, las que se sustentan en que su evaluación debe realizarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica, esto es, teniendo en cuenta *“la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos”* y la idoneidad del perito. Ello conduce a que se excluya la discrecionalidad irracional, debiendo entonces el juez motivar si acoge ese medio de prueba o lo desecha y explicar las razones que lo llevaron a adoptar una u otra decisión.

De otro lado, debe tenerse en cuenta la existencia del testimonio técnico como medio probatorio, este lo rinde una persona que por sus conocimientos especiales en cierta materia puede emitir determinados conceptos, específicamente si pudo constatar los hechos objeto de la discusión.

Con relación a las antedichas herramientas de persuasión, tiene dicho la Corte: *“todas estas probanzas pueden brindar -en pie de igualdad- luz acerca de especiales conocimientos científicos sobre los hechos que el juez investiga, los cuales llegan al proceso de la mano de especialistas en la materia quienes no sólo aluden a situaciones que les constaron (en el caso de los testigos) sino a los conceptos u opiniones que esos hechos les merecen a la luz de la ciencia en que son expertos, aspecto éste último que encuentra similitud con la prueba pericial. (...) en principio, el testigo no debe responder preguntas que tiendan a provocar conceptos que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, y por eso se faculta al juez para rechazarlas, “excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia”.*⁷

3.4. Caso concreto

3.4.1. Con los medios de prueba arrimados, no ofrece discusión que el evento que motivó el inicio de la acción indemnizatoria tuvo lugar el día 20 de enero de 2018 a raíz del accidente donde se vio involucrado el vehículo de placas DAF335, propiedad del señor Lázaro Miguel Funieles Portillo, conducido por el codemandado Mauricio Giraldo Hernández, donde resultó gravemente lesionada la

⁷ SC-11151 del 21 de agosto de 2015

señora María Ensueño Largo, quien se encontraba en el sector denominado “La U” en la vía que de Supía lleva a La Felisa, Caldas. Así lo revelan las documentales allegadas, en particular el informe confeccionado por el agente Rodrigo Gálvez Baena, adscrito a la Policía Nacional, en que se consignó la descripción de las personas involucradas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar según lo por él hallado, conforme lo cual, no cabe duda de que el señor Giraldo Hernández se encontraba en ejercicio de la actividad peligrosa de conducción, mientras que la señora Largo tenía la condición de peatona.

Relativo a las consecuencias dañosas del suceso, se arrió la historia clínica que da cuenta de las afectaciones en la humanidad de la víctima, quien tras ser remitida como urgencia vital desde el Hospital local, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Avidanti de Manizales con los diagnósticos descritos como: *“TEC severo; Contusión pulmonar basal derecha; Neumotórax apical izquierdo; Trauma esplénico; Fractura de isquion derecho; Politraumatismo; Herida en región superciliar derecha e izquierda”*⁸, situación que mereció la realización de una laparotomía exploratoria el 23 de enero de 2018⁹, seguimiento estricto por neurocirugía y cirugía general, dándose su egreso el día 7 de febrero de 2018 con las siguientes anotaciones: *“se identificó fractura de rama íleo isqueopúbica derecha con indicación de manejo médico y fractura de clavícula derecha también con indicación de manejo médico a criterio de ortopedia”*.

Con posterioridad, la señora Largo padeció diversas afecciones que fueron calificadas por sus médicos tratantes como secundarias al trauma sufrido, así se relata en el récord confeccionado en abril de 2018 la patología llamada trombosis del miembro inferior derecho¹⁰ generada por el reposo prolongado que debió guardar para la recuperación de las múltiples fracturas; en diciembre de 2018 se describió: *“TVP provocada por postración 2ria y recuperación por politraumatismo”*¹¹; y acorde la historia elaborada en marzo de 2019 por los tratantes del Hospital de Caldas S.E.S, fue operada por el especialista en neurocirugía ante la *“evidencia de listesis grado 2 de C6-C7, que compromete saco dural en contacto con la médula espinal (...) asociado a paresia de miembro superior derecho”*¹².

Análogamente, en sede del último reconocimiento médico legal practicado el 13 de febrero de 2019, el galeno legista dictaminó una incapacidad definitiva de 70 días, deformidad física corporal, perturbaciones funcionales de los órganos del sistema nervioso central, la locomoción, miembros superior e inferior derecho, todas de carácter permanente¹³.

⁸ Fol. 35 Cdno. Ppal.

⁹ De acuerdo la historia clínica visible a folio 60 del Cuaderno Principal.

¹⁰ *“paciente con antecedente de accidente de tránsito hace 3 meses con fractura de clavícula, pelvis y daño ligamentoso en rodilla con posterior desarrollo de trombosis venosa profunda (...) en el momento persiste en cama en forma obligada con reposo prolongado como factor provocador de la trombosis venosa”* Fol. 79 ídem.

¹¹ Fol. 85. Cdno. Ppal.

¹² Fol. 147 ídem

¹³ Fls. 12-13 ídem

Las circunstancias antecedentes, dado el extenso periodo de recuperación, aunado a las subsecuentes limitaciones que le quedaron, han repercutido de forma directa en la señora María Ensueño, ocasionándole, conforme indicó en la demanda, perjuicios morales y de daño a la vida de relación, sumados a los patrimoniales de lucro cesante, toda vez que desde el hecho no ha podido regresar a ejercer el oficio comercial del que derivaba su subsistencia.

3.4.2 Reparos de Axa Colpatría Seguros S.A.

El ataque blandido por la compañía aseguradora contra el proveído de primer nivel, reposa principalmente en la indebida valoración del caudal suasorio, que a su juicio lo que realmente demostraba era la ruptura del nexo causal por la culpa única de la perjudicada; a más que, distinto a lo considerado por la *a-quo* el dictamen pericial allegado por la demandante adolecía de insalvables yerros que impedían acogerlo, siendo efectivamente desvirtuado en sede de la contradicción; y, los valores definidos como daño a la vida de relación no procedían al estar desprovistos de pruebas en torno a las actividades que previo al suceso le forjaban alegría o hacían su existencia placentera.

(i) Relativo a la causa generatriz del accidente, el Juzgado se valió de lo informado tanto por el operador del carro como de su propietario, en el sentido que el primero perdió el control del automotor saliéndose de la vía y atropellando a la víctima, afirmaciones a las que atribuyó los efectos adjetivos de la confesión, sin que estuviese probada la injerencia de la señora Largo en el resultado, por lo cual la presunción de culpa de que trata el artículo 2356 del Estatuto Sustancial Civil no fue alterada.

Frente a dicha conclusión, la compañía aseguradora mostró su desacuerdo, habida cuenta que los elementos persuasivos no fueron estudiados bajo las pautas de la razón y la sana crítica, pues de haber sido así se hubiese colegido que la afectada se hallaba en el tramo destinado al tránsito de vehículos con ocasión de las labores que allí estaban adelantando ella y sus familiares, una de las cuales indicó encontrarse aproximadamente a 50 centímetros de la señora María Ensueño, de lo que infiere que si las lesiones solo las sufrió ella era porque necesariamente estaba sobre la vía, factor que pudo llevar al señor Giraldo Hernández a perder el manejo del rodante.

Delanteramente anuncia la Sala que los argumentos proporcionados por la recurrente en torno a la fractura del vínculo causal con ocasión de la culpa exclusiva de la afectada deben desestimarse, puesto que las inferencias del letrado emergen ajenas a lo develado por los elementos de convicción que conforman el plenario, sin poderse extraer la destrucción de la culpa presunta de los encartados en la causación del suceso. Pasa a ilustrarse:

Según el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 que el croquis es un plano descriptivo contentivo de los pormenores de un accidente de tránsito levantado en el sitio de los hechos por la autoridad competente; en el de marras tal herramienta reseñada

bajo el N°C00538022¹⁴ da cuenta que siendo las 12:05 p.m. del 20 de enero de 2018, en zona rural de Supía, Caldas, vereda San Pablo, a la altura del kilómetro 57, se dio el incidente donde estuvieron involucrados el vehículo de placas DAF 335 operado por el señor Mauricio Giraldo Hernández en compañía del propietario, Lázaro Miguel Funieles Portillo y 3 personas más, en el que fue lesionada la señora María Ensueño Largo quien estaba como peatona, anotando el policial en el relato de las heridas: *“Trauma craneoencefálico severo, trauma abdominal severo”*.

Respecto al lugar se consignó que el tramo de la vía donde se dio era de doble sentido, con dos carriles, de características curva, pendiente, asfalto en buen estado, seco, con visibilidad y clima normales. A título de hipótesis, codificó como posible causa atribuible al conductor la N° 157: *“Pérdida de control, al entrar en curva se sale de la vía”* y en las observaciones adicionales plasmó: *“Conductor vehículo 1 al entrar en curva pierde control y arrolla a peatón y bienes carretas tracción humana, esto según lo observado en el lugar (...)”*.

La aludida manifestación encuentra eco en lo comunicado por los codemandados en el momento de rendir su interrogatorio, en la medida que el señor Mauricio sostuvo, además de desconocer por completo la carretera, que fue una de las curvas la que lo expulsó de ella impidiéndole maniobrar y chocando contra la baranda de seguridad¹⁵; mientras que el señor Lázaro Miguel ratificó la ignorancia del conductor sobre las condiciones de la vía, añadiendo: *“él pensó que eran rectas, cuando encontramos, aceleró la ida, no pudo manipular el carro y fue cuando hubo el impacto con la señora (...) se confió aunque no la conoce”*.

No tiene discusión entonces el hecho de que el golpe propinado a la demandante se dio tras la pérdida de control del automotor envuelto en el accidente, ello se desprende del informe contentivo de aseveraciones cobijadas por la presunción de veracidad dada la calidad de servidor público en ejercicio de las funciones propias del cargo que ostenta el agente policial que lo elaboró basado en su formación técnica en el tema, a la par de las afirmaciones del conductor y el propietario que iba como pasajero.

Resta así entrar a analizar lo referente a la presunta irrupción de la mencionada señora en la calzada destinada al tráfico vehicular, la que anticipadamente se anuncia, no fue acreditada por el mandatario judicial de la aseguradora, siendo por el contrario infirmada con las pruebas recaudadas en la instancia primaria.

En efecto, debe tenerse en cuenta que el bosquejo gráfico anexo al Informe Policial de Accidente de Tránsito, denota la existencia de una larga huella de derrape o arrastre, dejada por la llanta delantera de la camioneta, contigua al borde derecho de la carretera, que finaliza casi a la altura del posible punto de impacto diagramado, que claramente se ve sobre la cuneta derecha de la vía, es decir, por

¹⁴ Fls. 6 a 8 del Cdno. Ppal.

¹⁵ *“Yo salí de la ciudad de Medellín con destino a termas de Caldas, la carretera no la conozco bien, no la conozco (...) una de las curvas me sacó de la carretera, en el momento yo iba aproximadamente a 40 a 50 km/h subiendo y el peralte no me dio bien para maniobrar y me voy contra la baranda de seguridad (...) perdí el control de la camioneta al subir porque desconocía totalmente la carretera y falta mucha señalización”*

fuera del segmento de tránsito de automotores. El vehículo terminó varios metros después, donde se dibujó su parte anterior encima de la zanja derecha, costado por el cual se dio todo su desplazamiento y presentaron los daños a que alude el IPAT.

Obran además los testimonios de las personas que presenciaron el suceso, en particular los señores Yeison Alexander Aguirre Ríos¹⁶ y Fanny Aguirre Largo¹⁷, quienes a pesar de ser familiares de la promotora no fueron tachados por sospecha y sus dichos en esencia fueron uniformes al referir que al tiempo del accidente la señora María Ensueño se hallaba por fuera del asfalto donde circulan los carros.

La concordancia entre los medios suasorios antes relacionados, basta para desestimar la afirmación de la aseguradora en el sentido que la afectada se encontraba invadiendo la calzada vehicular, permitiendo a su vez calificar de plausible la teoría proporcionada en el libelo en torno a la manera en que ocurrió el atropello, es decir, a raíz de la pérdida de control del operador sobre la camioneta, que a su vez ocasionó su salida de la carretera; e incluso es posible predicar que a su consumación se sumaron factores atribuibles exclusivamente al conductor, esto es, su admitido desconocimiento sobre las características del terreno por el que transitaba, sin olvidar la aceleración que llevaba conforme relató el señor Funieles Portillo, derivando de allí, tal como lo dijo el codemandado, que el señor Mauricio “se confió”.

Y es que observando los estragos causados en la humanidad de la víctima, tales como el trauma craneoencefálico severo, las heridas en la zona superciliar bilateral, la contusión pulmonar, sus múltiples fracturas y demás, se torna lógico pensar que la aceleración a que refirió el señor Lázaro Miguel y el exceso de velocidad relatado por los declarantes traídos a instancias de la actora, fueron ciertos, enseñando las reglas de la experiencia que una velocidad prudente en un tramo pendiente, no hubiera generado lesiones de la magnitud y trascendencia que padeció la señora María Ensueño.

Valga decir que lo sugerido por el mandatario de la recurrente, en el entendido que el señor Hernández Giraldo no pudo manipular el automotor con ocasión de los obstáculos advertidos en la vía, en especial la presencia de la afectada en ella, en ningún momento fue aducido por este en su declaración ya que únicamente aludió a su ignorancia sobre las dificultades con que contaba el trayecto emprendido, ni se colige de los restantes elementos probatorios, por lo cual lo afirmado por el letrado luce contraevidente, pudiéndose predicar que se limitó a plantear dudas, no a ofrecer certeza en cuanto a su tesis.

Puestas así las cosas, lo cierto es que la divergente no proporcionó medios de convicción que conduzcan a dar por establecida la culpa exclusiva de la demandante, tornándose sus inferencias en meras conjeturas que al carecer de

¹⁶ “Ella se hizo por ahí a 4 metros más arriba de donde nosotros estábamos, fuera de la vía, fuera de la raya blanca”

¹⁷ “Nosotros estábamos ahí como a 2 metros de ahí del sardinel de la carretera (...) de la orilla de la carretera estaba a una distancia de 2 a 3 metros aproximadamente (...) estaba mi persona, mi hermana y mis dos sobrinos”

probanzas que las respalden no aportan nada al proceso, sin que el hecho de que quien se encontraba cerca a la víctima no sufriera lesiones, baste a efectos de concluir lo contrario, máxime cuando la testigo Fanny Aguirre Largo informó que escapó del accidente al encontrar resguardo recostándose en un muro con su sobrino¹⁸, de no haber sido así podría decirse con alto grado de acierto que las consecuencias del evento serían incluso más gravosas.

Dilucidado que el supuesto actuar irreflexivo de la señora María Ensueño no encuentra asidero alguno, en el *sub lite* aflora diáfano que la ruptura del nexo causal por ese específico aspecto deviene improcedente.

Para finalizar, recuérdese que el cargo dirigido a la equívoca tasación de las pruebas se supedita a la efectiva demostración de los presuntos yerros por parte de quien los alega, acreditando que las deducciones del juzgador carecen de lógica, son desacertadas, e incluso caprichosas al no guardar vínculo con el contenido material de los medios de convicción, labor en que el extremo pasivo fracasó, puesto que sus reparos contra la sentencia en lo que se circunscribe a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del evento, gravitaron alrededor de escenarios fácticos no comprobados, lo que de manera evidente impide al Tribunal revocarla para en su lugar acceder a la absolución deprecada.

(ii) De otro lado, pese a que la aseguradora no discutió expresamente los valores otorgados por perjuicios patrimoniales, sí lo hizo frente la determinación primaria de acoger el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado por la demandante para liquidarlos, habida consideración que adolecía de errores que minaban su capacidad suasoria, empezando porque no reunía los requerimientos adjetivos a fin de tenerlo como tal según el artículo 226 C.G.P., no se describieron como es debido los métodos empleados para llegar a las conclusiones plasmadas y además su contenido quedó en entredicho con la contradicción que ejerció la llamada en garantía en sede de la audiencia siendo esa la oportunidad adjetiva pertinente, pues difirió de lo considerado en el sentido que sólo ello podría lograrse mediante la aportación de otra experticia.

Al respecto cabe decir que la promotora, a propósito de estructurar los citados menoscabos aducidos en la modalidad de lucro cesante, pretendió acreditar con el documento elaborado el 25 de noviembre de 2019 por el médico Hernando Restrepo Osorio, avalado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la merma de su capacidad laboral, misma que le ha impedido retornar a sus oficios comerciales como vendedora informal de comestibles, cartulario que, como lo refiere el recurrente, no reúne las características indispensables para considerarlo dictamen pericial, en tanto se omitió la observancia de las exigencias formales de que habla el canon que lo regula, no por ello puede desdeñarse de plano, toda vez que quien compareció a ilustrarlo, a vista de la Colegiatura, ostenta la calidad de testigo técnico.

Lo anterior por cuanto los aspectos sobre los cuales conceptuó, se fundamentaron en la historia clínica completa, es decir la elaborada con ocasión del evento y las

¹⁸ “yo me recosté un poquito con un sobrino mío contra la pared y ella se quedó ahí parada”

posteriores a este y el examen físico realizado de manera personal a la paciente el 18 de octubre de 2019, ajustándose así a la definición según la cual, este tipo de deponentes al tener un conocimiento especializado en determinada materia y haber percibido por sus propios sentidos los hechos puestos a su consideración, se halla habilitado para emitir opiniones o conclusiones técnicas.

En tal norte, de forma reciente en sentencia SC4425 del 5 de octubre de 2021, sentó la Corte Suprema de Justicia: “(...) **tanto las afirmaciones de los testigos técnicos, como las conclusiones contenidas en una experticia, resultan valiosas para el proceso en tanto vengan precedidas de explicaciones suficientes, que brinden al juez herramientas para su valoración racional.** Conforme con ello, al valorar una prueba de este tipo, el fallador debe contar con elementos de juicio que le permitan determinar, a partir de bases objetivas, el grado de credibilidad que ameritan las afirmaciones del testigo técnico o el perito, diferenciando así sus apreciaciones técnicas de las simples opiniones subjetivas, carentes de bases fundadas.”

Dicho lo precedente, se advierte que con ocasión de lo avistado por el galeno en la data de valoración de la paciente, aplicando el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, Decreto 1507 de 2014, fue que arribó a sus inferencias respecto a la disminución consignada, lo que deviene permitido por el artículo 220 C.G.P al indicar como deber del Juez el rechazo de las preguntas tendientes a provocar conceptos del declarante: “*excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia.(..)*” y si a esto se suma que el artículo 165 del citado elenco procesal contempla la libertad de medios probatorios a favor de las partes, válidamente se concluye la procedencia de estimar la herramienta aportada, se itera, no en calidad de peritaje, sino de testimonio técnico.

A lo referido se aúna que no es sólo el concepto aislado del médico el que obra en respaldo de la afectación esbozada como fundante de la reparación concedida, pues además se encuentran los dictámenes del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las historias clínicas que se relacionaron al inicio de la providencia, constancia de los múltiples padecimientos experimentados por la señora María Ensueño en razón del accidente, que se erigen en instrumentos que armonizan perfectamente con las aserciones del experto Restrepo Osorio, Magister en medicina ocupacional.

Atendiendo a lo indicado, es dable sostener que el objetivo de la recurrente, dirigido a invalidar el proveído con exclusiva base en las presuntas falencias del testigo técnico, está lejos de alcanzarse.

(iii) Finalmente, la censura mostró su desacuerdo con la admisión del daño a la vida de relación para la víctima, al entender que de las pruebas recaudadas no emanaba en modo alguno su existencia, ya que nada se estableció frente a las actividades genitoras de placer que desarrollaba la señora María Ensueño antes del fatídico evento.

El reparo formulado por la compañía de seguros en este punto habrá de recibirse parcialmente. Aunque no se comparte la absoluta ausencia de demostración del rubro reparado, se advierte que la cuantía otorgada no se acompasa a la magnitud del perjuicio revelada por las herramientas de convicción obrantes en el dossier.

Según quedó explicado en el acápite normativo, la noción del daño a la vida de relación corresponde a la alteración de las condiciones de existencia de la víctima respecto a su entorno exterior; el desmedro que padece con el hecho generador del daño impidiéndole gozar de su vida del modo que venía haciéndolo antes de su ocurrencia, comprendiendo tanto las actividades rutinarias como el disfrute de los placeres vitales, distinguiéndose por ello del perjuicio moral que irradia a la esfera más íntima del damnificado.

Imperativo se vuelve que quien depreca su reparación, proceda a la precisa comprobación a través de la pluralidad de herramientas suasorias concebidas por el ordenamiento jurídico a dicho fin, no pudiendo ser de otra forma por el principio *onus probandi* a partir del cual se afirma como deber de las partes el acreditar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones. En otras palabras, conforme la teoría general de la prueba quien pretende le sea reconocido un derecho debe acreditar con suficiencia los elementos constitutivos del mismo; la carga probatoria no se colma con la formulación de hipótesis o conjeturas, sino mediante la real aportación de medios que permitan formar la convicción en la célula judicial, máxime tratándose de la demostración de los perjuicios de la naturaleza que se estudia, habida cuenta que su certidumbre siempre debe emerger indiscutible como requisito forzoso para acceder a la petición indemnizatoria.

En el libelo genitor se indicó genéricamente que el perjuicio deprecado se sustentaba en la afectación del ámbito social, familiar y laboral, en tanto desde el accidente la damnificada tiene restricciones en su movilidad y debe estar asistida permanentemente por otras personas, afirmaciones que a pesar de ser generales logran ilustrarse con el testimonio de la señora Dora Elena Hernández al relatar que la gestora, quien además fue la encargada de enseñarle el oficio que en la actualidad la deponente desempeña, era líder en la asociación de los negocios informales participando de las actividades de esparcimiento que organizaban periódicamente¹⁹, siendo esto concordante con lo informado por el hijo Jhonier Steven Guevara cuando refirió que antes del suceso su progenitora tejía lana, asistía a eventos y disfrutaba de dar paseos²⁰.

Lo anterior sin duda justifica cómo las lesiones sufridas, que conforme la historia clínica y el dictamen de la autoridad legista derivaron en serias limitaciones físicas e intervenciones médicas posteriores, tienen incidencia directa en la manera en que la señora María Ensueño, desde el incidente, se relaciona o desenvuelve con su mundo exterior; es decir, lo descrito por los relacionados declarantes apoya el contenido del hecho 25 de la demanda, permitiendo comprender la transformación

¹⁹ “(...) ella era la que participaba haciéndonos los sancochos, en las reuniones que le dábamos los regalos a los niños, todo, ella era una de las cabezas que llamamos de la asociación de los negocios, ya ahorita pues nada, ella no hace nada”

²⁰ “(...) ella antes salía, iba y hacía el mercado, salía por ahí a paseos, a eventos, ya no puede (...)”

externa de su existencia con el entorno social a que estaba acostumbrada, en razón del hecho dañoso.

Sin perjuicio de lo indicado, en concepto de este Colegiado los aludidos insumos de persuasión no bastan para otorgar una reparación en la cuantía determinada por la judicial primaria, cuyas consideraciones al respecto, vertidas en el fallo confutado no fueron suficientemente motivadas, lo que pudo deberse a que en este punto faltó una mayor diligencia en la labor de la promotora para conducir al convencimiento sobre la trascendencia o extensión del daño padecido.

De acuerdo a lo dicho, hay lugar a disminuir el monto otorgado por el daño a la vida de relación de la señora María Ensueño Largo, que se fijará en esta sede en 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, \$15.000.000.

3.4.3. Con relación a la parte demandante

El desacuerdo de la parte actora, radica en: **(i)** la sanción impuesta por el Juzgado cimentado en la excesiva tasación de los perjuicios patrimoniales, ya que dicho ordenamiento debía consultar criterios tales como la buena fe de quien prestó el juramento estimatorio conforme la Sentencia C-157 de 2013 y que el mismo se hizo con base en los elementos obtenidos en sede preliminar a la interposición de la demanda; a más que **(ii)** la aseguradora debía responder por los montos indemnizatorios en virtud del principio de reparación integral de la víctima, dado su papel como interviniente en el proceso en el que pudo participar resistiéndose tanto a la acción principal como a las pretensiones del llamamiento en garantía.

A efectos de resolver el primero de los reclamos, aflora necesario recordar que el precepto 206 del Código General del Proceso, siguiendo los antecedentes otrora plasmados por el Código Judicial (Ley 105 de 1931) y las reglas adjetivas posteriores (artículo 211 Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010), previó la manera de desincentivar el inicio de demandas cuyas pretensiones resultan fabulosas, excesivas o temerarias en detrimento de los principios y valores que orientan la función jurisdiccional.

La disposición citada, en los términos actuales concibe la imposición de penalidades a cargo de la parte que formula el juramento bajo dos parámetros, el primero concerniente a la excesiva tasación, que aunque supone la prosperidad del pedimento, castiga su sobreestimación por encima del 50% de la cuantía efectivamente acreditada con los medios de prueba; mientras que la restante, que se halla en el párrafo, alude a *“(…) los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.”*

Pues bien, vista la jurisprudencia traída a colación por el vocero de la demandante para fundar su reproche, al rompe advierte la Magistratura que el pronunciamiento en aquella ocasión adelantado por la Corte se cierce sobre la última de las hipótesis, toda vez que fue el párrafo del canon 206 el objeto de escrutinio constitucional y cuyo presupuesto, esto es, la sanción por falta de demostración de

perjuicios, dista ampliamente de lo acaecido en el *sub judice* donde los menoscabos materiales que se establecieron (\$160.595.251), diferían en más de un 50% con los estimados (\$349.493.894).

En respaldo de lo indicado, conviene memorar la providencia C-279 del año 2013, en que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional expresó: “(...) *la sanción contemplada en el inciso cuarto no es excesiva ni desproporcionada y se diferencia claramente de la sanción analizada en la sentencia C – 157 de 2013 (...) tiene finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas “temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal colombiano. En este marco, la sanción se fundamenta en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia, el cual puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia (...)*”.

Es por lo anterior que la inconformidad de la promotora no está llamada a prosperar, ya que la decisión del Despacho no puede tildarse de ilegal o incongruente, sino que obedeció a las consecuencias procesales que define el ordenamiento jurídico para casos como el de marras, sin miramiento de la buena fe o la diligencia de la parte, deviniendo así necesario confirmar la sanción indicada.

(ii) Manifestó el letrado representante de los intereses de la señora María Ensueño Largo su divergencia con que la condena se dirigiera únicamente frente a los demandados disponiendo el reembolso por parte de la aseguradora cuando aquellos procedieran al pago, teniendo en cuenta que esto podría interferir en detrimento de la real reparación a que la damnificada tiene derecho, tornándose la sentencia en desconocedora del régimen de solidaridad derivado del contrato de seguros y del hecho que la llamada en garantía se opuso como si fuese demandada directa a las pretensiones del libelo inicial.

Frente al tópico, la compañía aseguradora en el traslado del recurso, instó que dado el caso de confirmatoria de la responsabilidad, se mantuviera el ordinal como lo profirió el Juzgado, toda vez que la convención fue suscrita con el demandado Funieles Portillo, no con la víctima quien no ejerció la acción con que contaba contra la entidad.

Como razón sustancial del llamamiento, los codemandados adujeron la renovación de la Póliza de seguro de automóviles N° 2000295 con vigencia del 25 de junio de 2017 al 25 de junio de 2018, donde figura como tomador, asegurado y beneficiario el señor Lázaro Miguel Funieles Portillo, extendida por Axa Colpatria Seguros S.A., amparando, para lo que interesa al asunto, la responsabilidad civil extracontractual ocasionada por la “*MUERTE O LESION UNA PERSONA*”, en un valor hasta de \$600.000.000, ítem descrito en las condiciones generales así: “*AXA COLPATRIA INDEMNIZARÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR EL ASEGURADO NOMBRADO EN LA CARÁTULA, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, PROVENIENTES DE UN ACCIDENTE O SERIE DE ACCIDENTES EMANADOS DE UN SÓLO ACONTECIMIENTO CAUSADO POR EL VEHÍCULO DESCRITO EN ESTA PÓLIZA, CONDUCTO POR EL*

ASEGURADO O POR CUALQUIER PERSONA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR ÉL, HASTA POR LOS LÍMITES PACTADOS APLICADOS COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 3.3.1. DE LA CONDICIÓN 3.3 VALORES O SUMAS ASEGURADAS”.

Como lo tiene dicho este Tribunal, en concordancia con lo enseñado por la jurisprudencia, el seguro de responsabilidad engendra para el asegurado y el asegurador deberes de distinto origen frente al tercero afectado, pues el primero comparece a la indemnización con fundamento en el contrato, incluso si el perjudicado no hizo parte de aquél cuando sus efectos, según lo estipulado en las cláusulas respectivas lo amparan; mientras que al segundo, es la materialización del suceso dañoso la que le impone el imperativo de resarcir a la víctima.

Pese a dichas fuentes ser conexas por cuanto la ocurrencia del daño en cabeza del tomador o asegurado abre paso a la intervención del asegurador en los precisos términos convencionales pactados, ello no implica la existencia de responsabilidad civil solidaria, por cuanto no es ni será civilmente responsable del hecho dañoso y por ende de los perjuicios causados.

Al respecto ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia: **“Conviene insistir una vez más que en lo tocante con la relación externa entre asegurador y víctima, la fuente del derecho de ésta estriba en la ley, que expresa e inequívocamente le ha erigido como destinataria de la prestación emanada del contrato de seguro, o sea, como beneficiaria de la misma (artículo 1127 C. de Co.). Acerca de la obligación condicional de la compañía (artículo 1045 C. de Co.), en efecto, ella nace de esta especie de convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual aquella asumirá, conforme a las circunstancias, la reparación del daño que el asegurado pueda producir a terceros y hasta por el monto pactado en el respectivo negocio jurídico, de suerte que la deuda del asegurador tiene como derecho correlativo el de la víctima – por ministerio de la ley – para exigir la indemnización de dicho detrimento, llegado el caso.”²¹**

Atendiendo a la función resarcitoria del seguro y de cara a las consideraciones vertidas sobre el tema en el acápite jurídico del presente proveído en cuanto a la institución del llamamiento en garantía, que tiene como efecto práctico el traslado de las consecuencias adversas de la decisión contra el llamante al llamado, encuentra la Colegiatura que le asiste razón al apelante, puesto que a pesar de que la intervención de Axa Colpatria Seguros S.A. en el *sub lite* se suscitó a través de dicha figura jurídico procesal, reñiría con los criterios más elementales de justicia material, a la par de con el principio de indemnización completa e inmediata a favor de la víctima, admitir que la obligación de la aseguradora se supedite a que los demandados desembolsen primero, máxime cuando la compañía ya tiene pleno conocimiento sobre la ocurrencia del siniestro y la responsabilidad de su asegurado en el mismo.

²¹ Sentencia 7173 del 10 de febrero de 2005, M.P. César Julio Valencia Copete

Dicho de otra manera, aunque la demandante no ejercitó la acción directa contra la compañía, lo cierto es que esta compareció a la litis oponiéndose a la prosperidad de los pedimentos de la demanda principal, derivando su obligación de sanear el daño de la ley misma, debido al vínculo asegurativo suscrito con quien lo produjo, teniendo en mente que el contrato de seguro de responsabilidad civil: ***“impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado”***²².

Así las cosas, no queda camino diferente a la modificación del fallo en el sentido de disponer el descargo de las reparaciones en cabeza de la llamada en garantía, dentro de los límites convencionales contemplados en la póliza de seguro de automóviles N° 2000295, instrumento del que emana su obligación.

3.5. Conclusión

Conforme a lo reseñado, la providencia confutada será confirmada en lo atinente a la declaratoria de responsabilidad civil de los codemandados y alterada en cuanto a reducir el monto de los perjuicios reconocidos a la damnificada por el daño a la vida de relación y disponer el pago de las indemnizaciones en cabeza de la aseguradora teniendo claro que su débito surge en razón de la Póliza vigente al momento de los hechos.

3.6. Costas

Atendiendo a la prosperidad parcial de los recursos interpuestos por ambas recurrentes y a la diligencia por ellos desplegada en esta instancia para defender el fallo en los aspectos que consideraron favorables, estima la Sala que no hay lugar a imponer condena en costas en esta instancia.

IV. DECISIÓN

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIONES la sentencia proferida el 10 de agosto de 2021 por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas, dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurado por la señora María Ensueño Largo en contra los señores Mauricio Giraldo Hernández y Lázaro Miguel Funieles Portillo; trámite en el que Axa Colpatria Seguros S.A. comparece en calidad de llamada en garantía.

²² Artículo 1127 Estatuto Mercantil

SEGUNDO: MODIFICAR los ordinales **SEGUNDO** y **CUARTO** de la parte resolutive de la providencia, los cuales quedarán así:

“SEGUNDO: CONDENAR a los demandados **MAURICIO GIRALDO HERNÁNDEZ (15’030.440)** y **LAZARO MIGUEL FUNIELES PORTILLO**, al pago de los perjuicios causados a **MARÍA ENSUEÑO LARGO**, así:

PERJUICIOS MATERIALES

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO en suma de veintiún millones quinientos cuarenta y seis mil ochenta y cinco pesos ml (\$21’546.085).

LUCRO CESANTE FUTURO en suma de ciento treinta y nueve millones cuarenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos ml (\$139’049.166).

PERJUICIOS INMATERIALES

DAÑO MORAL en suma de cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos pesos ml (\$45’426.300)

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN en suma de quince millones de pesos (\$15’000.000).

ABSOLVER a los demandados de la pretensión de daño emergente.

(...)

CUARTO: CONDENAR a la compañía **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.**, en virtud de la Póliza de Seguro de Automóviles N° 2000295 respecto del vehículo de placas **DAF-335**, a garantizar el pago de la indemnización impuesta a cargo del señor **Lázaro Miguel Funieles Portillo**, bajo las condiciones generales y particulares del contrato de seguros.”

TERCERO: DEJAR incólumes los demás ordenamientos.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE

Los Magistrados,

ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS

ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO

JOSÉ HOOVER CARDONA MONTOYA

Firmado Por:

Angela Maria Puerta Cardenas

**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 6 Civil Familia
Tribunal Superior De Manizales - Caldas**

**Jose Hoover Cardona Montoya
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 5 Civil Familia
Tribunal Superior De Manizales - Caldas**

**Alvaro Jose Trejos Bueno
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 9 Civil Familia
Tribunal Superior De Manizales - Caldas**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

cf8b9746eeed75bcf89cc637582630f6f88436c904116513b3edcc836a6bbb19

Documento generado en 08/02/2022 12:07:46 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente
URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**